

México 1982-1988.

Los conflictos políticos en la crisis*

Raúl Benítez Manaut**

1. Introducción. El contexto internacional y económico en que se dan los conflictos políticos en México

El período analizado (1982-1988) comprende el último año de la presidencia de José López Portillo y el sexenio de Miguel de la Madrid. En lo económico, corresponde a los años en que se desenvuelve la peor crisis que ha tenido México en 50 años, manifiesta desde agosto de 1982, cuando el gobierno declaró su incapacidad para poder cubrir las amortizaciones del débito externo. En lo internacional también se presenta un conflictivo período, signado por la puesta en marcha del proyecto global neoconservador, consistente en percibir las luchas por la hegemonía en el mundo, enmarcadas en el llamado conflicto este-oeste y manifiesto desde el ascenso de Ronald Reagan a la presidencia de Estados Unidos.¹

A nivel internacional se inicia una fuerte lucha económica entre los países considerados "en vías de desarrollo" y los industrializados. Los primeros habían sufrido un acelerado proceso de endeudamiento externo durante la década de los años setenta. Sólo los países de América Latina pasaron de una deuda de 76.2 mil millones de dólares en 1975, a 308.3 mil millones de dólares en 1982.² De estos, a México le corresponden 78 mil millones de dólares.³ A fines de 1985 el monto para

México pasa de los 100 mil millones de dólares.

La primera consideración al respecto es que México inicia una política internacional de renegociación de la deuda, arrastrando al resto de los países latinoamericanos. Las consecuencias de ello se observan en la falta de voluntad política para lograr acciones concertadas con otros países latinoamericanos, con lo cual se aplican políticas de renegociación de la forma de pago de la deuda, privilegiándose las negociaciones bilaterales. En este nivel se expresa un conflicto que tiene importantes efectos políticos internacionales, y la forma de resolverse es evitar el enfrentamiento, a través de la concertación con el sistema financiero internacional. En esta lucha internacional, el interés del gobierno mexicano es no manifestar una oposición al sistema financiero internacional, bajo la lógica de la responsabilidad por haber aceptado el endeudamiento.

Para poder implementar lo anterior, se presentan cambios acelerados en la política económica gubernamental en un contexto de profunda crisis económica, con las siguientes características:

- Se produce el desmantelamiento de la participación del Estado en la economía.
- Se transforma el sector externo de la economía, pasando de ser un país "importador de capitales", en exportador neto de ellos, con una función totalmente distinta en el sistema económico internacional, y modificando de manera radical la planta industrial del país.
- Se despunta la inflación (en 1987 superó el 150%).
- Se vive una profunda recesión económica, cuyos rasgos principales son:
 - Crecimiento negativo del Producto Interno Bruto (PIB).
 - Disminución del Ingreso Per Cápita.
 - Aumento del desempleo abierto y subempleo

* Este ensayo forma parte del proyecto Perspectivas de América Latina, auspiciado por la Universidad de las Naciones Unidas.

** Investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM.

¹ Maira, Luis, *¿Una nueva era de hegemonía norteamericana?*, Buenos Aires, RIAL-GEL, 1986; y Cueva, Agustín (Comp.) *Tiempos conservadores. América Latina en la derechización de occidente*, Quito, El Conejo, 1987.

² CEPAL *Políticas de ajuste y renegociación de la deuda externa en América Latina*, Santiago de Chile, Cuadernos de la CEPAL, núm. 48, p. 4.

³ *Idem.*, p. 42.

- Crecimiento del llamado “sector informal de la economía.
- Disminución de la capacidad adquisitiva del salario.

A la par de las anteriores expresiones de la crisis, el proyecto económico del gobierno busca impulsar como alternativa la modernización integral de la economía. Para lograr este propósito se comienzan a implementar medidas que fortalecen al capital extranjero y al gran capital nacional, principalmente al sector financiero y comercial. En este contexto, las industrias maquiladoras tienen una gran expansión en la frontera norte; se presenta el capital japonés como vanguardia de la nueva industrialización y se pretende impulsar, para salir de la recesión económica, la llamada reconversión industrial, afectando a la pequeña y mediana industria manufacturera del país.

Estas manifestaciones de la crisis económica y de las políticas aplicadas para intentar superarlas tienen notorios efectos políticos en el país. A ello se añade la acumulación y el estallido de conflictos políticos expresados principalmente por el desgaste del sistema político.

Al aparecer la crisis económica como un indicador a través del cual se van a medir las posibilidades estatales de control político, es preciso mencionar que ésta representa la conclusión definitiva del modelo de desarrollo denominado “desarrollista”, vigente desde la década de los cuarenta. Los primeros indicadores de agotamiento del mismo se dan a fines de los años sesenta y principios de la década de los setenta. Entre 1977 y 1981 México vive un breve lapso de auge económico, basado en la utilización de los recursos provenientes del petróleo y del endeudamiento; este intervalo sucumbe a mediados de 1982 y se expresó en agosto con la disminución crítica de las divisas.

Hacia septiembre de 1982, el gobierno, por la gravedad de la situación, nacionaliza el sistema bancario del país, con lo cual se abre un conflictivo momento de tensión con las fracciones más poderosas del capital privado. Al descontento provocado por la nacionalización de la banca se sumaron sectores sociales y políticos que, sin estar afectados directamente por dicha medida, perciben que fue un acto de autoritarismo que lesiona la propiedad privada.

Una de las expresiones más importantes de la modernización que vivió el país entre 1940 y 1980 fue la consolidación de los sectores medios. Estos, tanto en lo económico como en lo político, eran casi inexistentes antes de esos años. Políticamente emergen como una fuerza que numerosos analistas como Héctor Aguilar Camín consideran una “revolución silenciosa” en el país. Principalmente son actores políticos con una gran auto-

mía del tradicional sistema político y expresan su descontento en una tendencia ascendente que se fusiona a la emergencia y consolidación de movimientos de protesta en el conjunto de la sociedad civil.⁴

La orientación política de las clases medias se mide por indicadores de su participación en la sociedad y el sistema. En lo económico su conducta se determina por la capacidad de consumo. En lo político demandan respeto y participación en la toma de decisiones. Por la crisis económica pierden de manera acelerada su capacidad adquisitiva y responsabilizan al Estado. Por ello, su descontento se orienta a fortalecer la rechazación de su opinión política, rechazación que tiene como arena principal de confrontación a los procesos electorales, dándole fuerza y siendo la principal base social de apoyo del Partido Acción Nacional (PAN), en el norte y centro del país.

Sin duda, el amplio espectro que comprende a los sectores populares (campesinos, obreros, subempleados, desempleados, etc.) fue el más afectado por la crisis económica. Ello se debió al fracaso de las políticas implementadas por el Estado para intentar superar la recesión en estos años.

Los tres indicadores económicos que dan cuenta de ello, son la disminución acelerada de la capacidad adquisitiva del salario, el aumento del índice de precios —inflación— y el acelerado incremento del desempleo y subempleo. Estos tres indicadores son evidencia de que la lucha de clases, expresada en lo económico como la controversia por el destino final de las ganancias generadas en el proceso productivo, perjudicó entre 1982 y 1987 a los sectores sociales de menores ingresos.

En términos generales la inconformidad política fue expresada primero por las capas medias, más sensibles a los cambios que las perjudican en lo económico. La razón se debe a que el sistema político mexicano no tiene canales de mediación y de comunicación con estos sectores sociales. Por esto, la inmediata expresión de descontento favoreció en un inicio a la derecha. Posteriormente los sectores populares expresan su inconformidad dado que las instituciones, pilares del sistema, se dirigen hacia ellos y existe un mayor control corporativo. Por esta razón, el descontento popular se expresa a través de la pérdida de legitimidad de los sindicatos y otras organizaciones obreras ligadas al partido oficial, así como en las organizaciones campesinas y populares. También la protesta popular emerge con la aparición de numerosos movimientos sociales que, aunque muchos

⁴ La noción de sociedad civil se entiende en sentido gramsciano, como el espacio donde los distintos sectores expresan sus puntos de vista frente al Estado.

de ellos tienen demandas limitadas (“despolitizadas”) ubicadas en el espectro de lo reivindicativo, son una de las expresiones de la forma novedosa que adquieren los conflictos políticos en México en los años ochenta.

Tomando como punto de referencia a nivel cuantitativo los precios de la canasta básica de consumo de los mexicanos, como ya se señaló, es notoria la pérdida de capacidad adquisitiva del salario, perjudicando a los sectores de menores ingresos: en 1970, el 38% de la población es ubicada en la llamada “brecha legal estricta de marginación” y 60% en la “brecha legal estricta de pobreza”. En 1980 los datos bajan al 11% de la población para la primera y 45% para la segunda. En 1987, hacia el primero de marzo, los indicadores son similares a los de los años setenta: 38% para la brecha de marginalización y 65% para la pobreza.⁵

Por lo anterior, se producen numerosas expresiones de descontento que van desde la organización en agrupaciones de barrio, hasta disidencias notables que buscan autonomía del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Estado, por parte de organizaciones obreras y campesinas, así como de amplios sectores de trabajadores estatales. Estos movimientos sociales y políticos manifiestan su inconformidad a través de nuevas formas de lucha y organización. Ejemplo de ello son las organizaciones de barrio, que buscan una mejor opción de vivienda (hecho expresado principalmente en la ciudad de México), y el enfrentamiento directo en el caso de numerosos movimientos campesinos (por ejemplo, los que se llevaron a cabo con gran violencia entre 1980 y 1983 en estados del sur como Chiapas), donde incluso se dio una gran violación de derechos humanos.⁶ También se observan importantes disidencias en algunos de los sindicatos más poderosos del país, como el del sector magisterial (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-

ción -SNTE-).⁷ En México, estos movimientos han sido estudiados de forma sistemática.⁸

En el presente ensayo no se van a analizar detalladamente los conflictos políticos que tuvieron lugar durante el periodo de estudio. Centraremos nuestra atención en los demás sobresalientes, para poder realizar un diagnóstico preliminar de los efectos de causados por los mismos, la respuesta estatal a ellos, así como algunas apreciaciones sobre su probable futuro inmediato.

2. Los movimientos populares en los años ochenta⁹

Uno de los primeros efectos de la crisis es la manifestación, al margen del sistema, de numerosos movimientos populares.

En el sindicalismo oficial se observa una tendencia a manifestarse en contra de las medidas económicas del régimen. La razón de ello se debe a la aplicación de las políticas neoliberales que, al afectar directamente al salario real y el empleo, hacen peligrar la representatividad de los organismos que hacen posible el “pacto corporativo” histórico de organismos como la Central de Tra-

⁸ Para un análisis más profundo sobre cómo se han manifestado los conflictos políticos y los movimientos sociales en los diferentes estados de la República, véanse las ponencias del “Seminario Nacional sobre las entidades federativas: la sociedad, la economía, la política y la cultura”, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, 6 al 10 de abril de 1987. También véanse las publicaciones del proyecto PAL-UNU-UNAM:

– Mejía, Ma. Consuelo y Sergio Sarmiento *La lucha indígena: un reto a la ortodoxia*, México, Siglo XXI, 1987.

– Concha, Miguel, Oscar González, Lino Salas, Jean Pierre Bastian *La participación de los cristianos en el proceso de liberación en México*, México, Siglo XXI, 1986.

– Sierra, José Luis, Antonio Paz, Guadalupe Huchim *Política y poder en Yucatán*, Academia yucatanense de Ciencias y Artes, Mérida, 1986.

– López, Adriana, *La lucha por los ayuntamientos en México*, México, Siglo XXI, 1986.

– Ramírez, Juan Manuel *El movimiento urbano popular en México*, México, Siglo XXI, 1986.

– Lau, Rubén, Vicente Jaime, Víctor Orozco *Sistema político y democracia en Chihuahua*, Universidad Autónoma de Cd. Juárez, Chihuahua, 1986.

– Tamayo, Jaime, (Coord.) *Perspectivas de los movimientos sociales en la región centro-occidente*, U. de Guadalajara, 1986.

– Alonso, Jorge, (Coord.) *Los movimientos sociales en el valle de México*, México, 1986.

– Silva, Gilberto, (Coord.) *Movimientos sociales en Querétaro*, U. A. de Querétaro, 1984.

– Castillo, Jaime, (Coord.) *Los movimientos sociales en Puebla* UAP, Puebla, 1986.

– Rivas, Fernando, (Coord.) *La democracia emergente en el estado de Colima. 1979-1984*, U. de Colima, 1986.

– Varios. *Sistema político y democracia en el estado de México*, U. A. del Estado de México, 1986.

– Burgos, Rubén, (Coord.) *Movimientos sociales en el noroeste de México*, U. A. de Sinaloa, 1985.

⁹ En términos generales nos hemos basado en Cadena, Jorge, “Las demandas de la sociedad civil, los partidos políticos y las respuestas del sistema”, en *Primer Informe sobre la democracia*, op. cit.

⁵ Boltvinik, Julio, “Ciudadanos de la pobreza y la marginación”, en *El Cotidiano*, UAM-Azcapotzalco, México, núm. 19, sep.-oct. de 1987, p. 308.

⁶ “En Chiapas al hambre se le responde con balas”, *Proceso*, México, núm. 194, 21 de julio de 1980; y “Chiapas, Recuento de la represión”, *Proceso*, núm. 203, 22 de septiembre de 1980, *Amnistía Internacional México. Los derechos humanos en zonas rurales* (intercambio de documentos con el gobierno mexicano sobre violaciones de los derechos humanos en Oaxaca y Chiapas), Publicaciones Amnistía Internacional, Londres, 1986; y Centro de Derechos Humanos Francisco de Victoria “Las violaciones a los derechos humanos individuales en México (periodo 1971-1986)”, en González Casanova, Pablo y Jorge Cadena (Comps.) *Primer Informe sobre la Democracia. México 1988*, México, Siglo XXI, UNAM, 1988.

⁷ “Orígenes del plantón magisterial”, *Proceso*, núm. 223, 9 de febrero de 1981; “Injuriosa y calumniosa la disidencia magisterial”, *Proceso*, núm. 284, 12 de abril de 1984.

bajadores de México (CTM) y el Congreso del Trabajo, con el Estado.¹⁰ Ya desde 1980 el sindicalismo oficial se había manifestado en contra de la incorporación de México al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT) y constantemente se pronuncia en contra del desmantelamiento de la participación del Estado en la economía.¹¹

En este sentido, una de las fisuras más significativas, y que implica el desarrollo y crecimiento de un conflicto importante, se da con la aparición de grupos disidentes del sindicato magisterial, agrupados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Su origen es el descontento generado por maestros del sur del país, al ver la desproporcionada baja de su salario, en comparación con el resto de la República, y por vivir en zonas de alta inflación (Chiapas y Tabasco), producto de la explotación petrolera.

También el movimiento campesino muestra signos de notable inconformidad y disidencia en el centro y sur del país. Ya desde 1979 se había realizado el Primer Congreso de Organizaciones Campesinas Independientes, habiéndose constituido la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) en octubre. La CNPA pone en juego la relación del campesinado con el Estado, pues es el grupo social más afectado por la política de modernización del campo. Ello debilita a la oficial Confederación Nacional Campesina (CNC).

A nivel sindical, la independencia del movimiento obrero del sistema político se remonta a principios de los setenta. En la década del ochenta se manifiesta en la aparición de la Unidad Obrera Independiente (UOI) y la Coordinadora Sindical Nacional (COSINA). La primera incluye a agrupaciones de los sectores automotrices y metalmeccánica. La segunda nace en 1982, en un encuentro que congregó a 63 sindicatos independientes y algunos disidentes de las centrales oficiales.

Uno de los movimientos que más crecimiento tendrá en la década de los ochenta es el llamado Movimiento Urbano Popular (MUP).¹² Su organización se consolida con la creación, en abril de 1981, de la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (CONAMUP). Esta agrupación cobra una fuerza creciente y cada vez aglutina en su seno a las nacientes organizaciones populares de numerosas partes del país. Tienen

fuertes bases en asentamientos irregulares de población en la periferia de la ciudad de México, donde habitan las familias de menores ingresos, y pone en jaque la capacidad de convocatoria de las agrupaciones oficiales como la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP).

La confluencia, articulación y unión de estas organizaciones es muy compleja en el contexto de la crisis. A fines de 1982, la CNTE, la CONAMUP, la CNPA y la COSINA confluyen en la creación del Frente Nacional de Defensa del Salario y Contra la Austeridad y la Carestía (FNDESCAC). Se congregaron más de 110 organizaciones políticas, sindicales, campesinas, estudiantiles y populares. Este movimiento ascendente de organizaciones populares no pudo consolidarse como tal, por los efectos disgregadores de la misma crisis económica y la actitud asumida por el Estado. El gobierno y las agrupaciones oficiales han combinado la mediatización con la represión para evitar que se constituya un movimiento independiente y alternativo. En el caso de los movimientos campesinos y magisteriales, la norma ha sido aplicar la represión. En el caso del movimiento obrero, cuando éste llega a hacer estallar las huelgas —como se verá a continuación—, la política oficial es prolongarlas, acelerar el desgaste de los sindicatos ante ellas y después buscar una solución amañada, ya cuando la capacidad de presión obrera está muy debilitada. Hacia el MUP la política oficial es de mediatización y sólo en casos extremos se llega a la represión —pues ésta es más difícil de aplicar—, por la dispersión de las organizaciones.

Otras iniciativas de organización popular tienen principalmente un carácter defensivo, ante el abatimiento del nivel salarial. En junio de 1983 se crea la Asamblea Nacional Obrero, Campesino y Popular (ANOP). Las organizaciones obreras, por su parte, en enero de 1986 crean la Mesa de Concentración Sindical, con un pliego de demandas que hacen referencia al efecto de la crisis en todos los sectores sociales.

Uno de los indicadores que muestran cómo se ha expresado esta organización popular, es el incremento en los emplazamientos a huelgas y el número de éstas. La proporción de las huelgas que estallan en relación con los emplazamientos es del 4.1% en 1983, 5.8% en 1984 y 3.6% en 1986. Entre 1982 y 1986, se emplazó a huelga en el país en 52,168 ocasiones, de las cuales estallaron 1,605.¹³ Un dato importante es que para propiciar el desmantelamiento del sector paraestatal, se fomentan los estallidos de huelga; la posición empresarial se muestra intransigente, para después

¹⁰ Ver Albina Garabito, Rosa, "México: el sindicalismo oficial ante la crisis actual", en CLACSO, *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta*, Santiago de Chile, 1985, págs. 159-166.

¹¹ Romo, Arturo, "La propuesta obrera", en González Casanova, Pablo, y Héctor Aguilar Camín, *México ante la crisis*, Vol. 2, México, Siglo XXI, 1985.

¹² Ver "El movimiento urbano popular" (Número monográfico) *Estudios Políticos*, Nueva Época, vol. 4-5, oct. 1985 —marzo de 1986, México, Fac. de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM.

¹³ Cadena, Jorge, *op. cit.*

proceder al cierre de la empresa y liquidar a los obreros y empleados. En otros sectores como el automotriz, que vive un profundo cambio en la tecnología incorporada, también se promueve el estallido de la huelga a fin de buscar la liquidación y luego recontratar a los obreros considerados necesarios. En el conflicto político desatado, la actitud de la Junta de Conciliación y Arbitraje es aceptar el estado contable de las empresas, para no proceder al aumento salarial. En caso de considerarlo necesario, se fomenta el cierre de la empresa desde la misma mesa de las negociaciones. El ejemplo más notorio de esto fue el conflicto que llevó al cierre y reestructuración de la empresa Aeroméxico, a principios de 1988.

Lo anterior muestra que los conflictos laborales a lo largo de estos años han pasado de una actitud combativa y ofensiva de las clases populares, a una lucha defensiva, tanto del salario como del empleo. Ello pone en ventaja al capital, razón por la cual ha disminuido notablemente el salario real. Hay cálculos que afirman que éste se ha reducido en aproximadamente 40% en 1988, en comparación con 1980.

3. El terremoto del 19 de septiembre de 1985 y sus efectos sobre los conflictos políticos del país.¹⁴

Entre los sucesos que han cimbrado recientemente al conjunto de la sociedad mexicana están los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985.

Ante este fenómeno fue evidente que la movilización popular autónoma en las labores de rescate —en este caso principalmente juvenil— tiene un gran potencial. Se demostró asimismo, al sistema político con gran vulnerabilidad, por un lado, y con gran fortaleza por el otro. Debilidad, dado que la autoorganización de solidaridad de la sociedad civil rebasó ampliamente al Estado. Fortaleza, porque muy rápidamente se fueron recuperando los canales de mediación de éste con la sociedad.

El terremoto hizo aflorar dos problemas que vive el México actual:

- 1) El fenómeno del trabajo subterráneo en condiciones de ilegalidad total —pues se comprobaron las numerosas violaciones a la Ley Federal del Trabajo—, con base en el empleo de mano de obra femenina, que indica hacia donde se dirige la situación de un sector que cobra cada vez mayor

importancia en la composición de la clase obrera: el trabajo de maquila —básicamente textil— basado en las subcontrataciones.¹⁵ Ello se dio al derrumbarse parte importante de las instalaciones de industrias textiles de la colonia San Antonio Abad y conocerse las condiciones de trabajo de las costureras.

- 2) La grave situación de la vivienda en la capital del país, demostró la concentración de la propiedad urbana y la incapacidad estatal para satisfacer esta demanda creciente. Incluso los sectores de la ciudad dañados por el terremoto, hacen emerger un actor nuevo del movimiento urbano: los damnificados.

Anteriormente se había expresado la organización y protesta de la población en los barrios periféricos de la ciudad. En ellos se ubicaban las recientes migraciones provenientes del campo y la demanda fundamental radicaba en la regularización de la tierra y la dotación de servicios. Ahora, la demanda es por vivienda propia, que satisfaga las necesidades mínimas de habitación y la lucha se da principalmente entre los inquilinos. La primera forma de protesta es producto de la modernización y urbanización acelerada del país. La segunda, de la concentración de la propiedad urbana. Por ello las demandas de los afectados por el terremoto tienen un potencial político notorio. A lo anterior el gobierno respondió con la expropiación de numerosas vecindades del centro de la ciudad —fue la primera y única medida “radical” del gobierno de De la Madrid—, y con la creación del programa de Renovación Habitacional Popular. La forma principal de solucionar este problema fue a través de la “mediatización” y satisfacción de las necesidades mínimas. A pesar de que no se resuelve íntegramente el conflicto, sí se controla el potencial de protesta política. Con los terremotos surgieron una serie de organizaciones que confluyeron en la llamada Asamblea de Barrios, con líderes populares como “Superbarrio”. Antes de septiembre de 1985 sólo se había presentado en México un movimiento similar de lucha en el barrio de Tepito, a principios de los años ochenta, por ello sus habitantes son la vanguardia de la nueva movilización popular.

Una de las características de la lucha entablada contra las inmobiliarias como la de Tlatelolco, una de las urbanizaciones más afectadas, es que plantean sus reivindicaciones como demanda directa y buscan que la respuesta estatal satisfaga rápida e íntegramente sus peticiones.

¹⁴ Aguilar, Adolfo, et. al. *Aún tiembla. Sociedad Política y cambio social el terremoto del 19 de septiembre en México*, México, Grijalvo, 1986.

¹⁵ Alonso, José Antonio, “Crisis, sismos y macroindustria del vestido”, F.C.P. y S., UNAM, mimeo, agosto de 1987.

Las dimensiones sociales de los terremotos a nivel cuantitativo describen la magnitud del conflicto. De ahí se explica su impacto en el conjunto de la sociedad: entre 10 mil y 30 mil muertos (la cifra oficial no supera los 10 mil); 1,148.3 millones de dólares en pérdidas directas según la Comisión Económica para América Latina (en septiembre de 1985 un dólar tenía aproximadamente el valor de 300 pesos);¹⁶ y más o menos 300 mil damnificados por la destrucción parcial o total de sus viviendas.

Entre las repercusiones políticas que afloraron con los sismos, se encuentra el despertar de amplios sectores sociales, anteriormente apagados y desmotivados. La lucha común en favor de los damnificados como forma de unión de intereses y solidaridad, constituyó la base que despuntó a la juventud en una activa participación que no se observaba desde 1968. La movilización durante las labores de rescate fue uno de los precedentes del movimiento estudiantil que estalló un año más tarde. Ante los sismos, la protesta en sus inicios era únicamente reivindicativa, y se convirtió poco a poco en protesta con matices políticos, al enfrentar al Estado y presionarlo para la real satisfacción de la demanda de los damnificados.

4. La lucha política electoral (elecciones federales de 1985 y estatales de 1986)

Uno de los conflictos políticos más importantes del país es la lucha por el respeto a las decisiones populares en los sufragios.

Es la arena electoral donde el conjunto de fuerzas y partidos políticos han definido el eje de su actividad política. La confianza en los medios electorales, y por ende en la lucha parlamentaria como forma de enfrentar la hegemonía del PRI y del Estado, conforman la base de la definición de las tácticas de prácticamente todas las fuerzas de oposición existentes en el país, tanto de derecha como de izquierda.¹⁷

La lucha por elecciones respetadas por el Estado, tuvo su primer éxito con el triunfo de la Coalición Obrera, Campesina y Estudiantil del Istmo (COCEI) en 1981. En elecciones extraordinarias, y con el registro del Partido Comunista Mexicano (PCM), la COCEI gobierna el municipio de Juchitán, Oaxaca, por dos años. El gobierno, tanto estatal como federal, aplicó el total aislamiento financiero para recuperar el municipio y, posteriormente, pasó a la represión de los dirigen-

tes de la COCEI.¹⁸ Hacia noviembre de 1983, el PRI "recupera" para sí Juchitán, en medio de la anulación de elecciones en varios municipios de la región y numerosas tomas de alcaldías.

El norte es la primera región del país donde la lucha y los conflictos desatados por las elecciones se expresa con gran fuerza. La derecha, encabezada por el PAN, comienza a tener importantes triunfos en elecciones municipales desde 1983. En julio, con el apoyo de los grupos empresariales locales, el PAN triunfa en los municipios de Chihuahua, Cd. Juárez, Delicias, Parral, Camargo y Casas Grandes, en el estado de Chihuahua. También obtuvo el triunfo en la capital de Durango. Además, según el PAN, le fueron arrebatados numerosos municipios por el PRI.

Del mismo modo, en Aguascalientes, Baja California y Sinaloa aumenta la votación en favor de este partido y, en menor medida, del Partido Demócrata Mexicano (PDM), también de orientación derechista.

Hacia 1984, el PRI sufrió descabros en tres municipios del Estado de México en manos del PAN, y perdió la posibilidad de triunfar en las elecciones para gobernador de 1985, ya que no logró el apoyo de los grupos empresariales de la entidad.¹⁹

El monto de mayor tensión entre el PRI y el PAN se da en 1985. Ese año el PRI enfrenta el ascenso de la oposición con una táctica que le dará buenos resultados. Por un lado, postular a los empresarios locales, y así restarle al PAN el apoyo de sus naturales aliados. La otra forma de disputar sus triunfos al PAN se da con base en el uso del fraude en las zonas rurales, que no podía controlar el PAN. Además, comienzan a darse importantes brotes de violencia, como quemas de ayuntamientos y paros cívicos, quemas de oficinas del PRI, etcétera. Este partido alega inconstitucionalidad en las formas de lucha, argumenta que el PAN está siendo financiado por sectores del gobierno de Estados Unidos, principalmente por los gobernadores y líderes del Partido Republicano en el sur, y utiliza el argumento de la seguridad nacional en contra de la oposición de derecha. Además, también participó de manera notable el clero en el apoyo al PAN.²⁰

Hacia junio de 1985, el PRI controla el 96% de los gobiernos municipales de todo el país; el 75% de los representantes en la Cámara de Diputados; y el 100% de los asientos del Senado.²¹

¹⁸ Cadena, *op. cit.*

¹⁹ Ver *Sistema político y democracia en el Estado de México*, *op. cit.*

²⁰ Torres, David, "El regreso de la iglesia. El episcopado y las elecciones federales de julio de 1985", en *Varios Políticas y partidos en las elecciones federales de 1985*, F.C.P. y S., UNAM, 1987.

¹⁶ Domínguez, Lilia, y Pedro Zepeda "Por cuanto fue el daño", Adolfo Aguilar, *op. cit.*, págs. 278-279.

¹⁷ González Casanova, Pablo, *El Estado y los partidos políticos en México*, segunda edición ampliada, México, ERA, 1985.

Lo anterior fue posible por el acceso a su registro electoral de numerosos partidos pequeños de izquierda y derecha, con las reformas de 1977 al Código Electoral, permitiéndoles la entrada a la Cámara de Diputados, a través de la llamada "Representación Plurinominal".²²

Las elecciones para diputados de julio de 1985, son indicadores importantes de la tendencia ascendente en favor de los partidos de oposición, ya que se celebran en todo el país, y permiten realizar diagnósticos de la correlación de fuerzas a nivel global. El promedio nacional de votos para el PRI fue del 65%. En 7 estados la votación fue menor a dicho promedio y en 25% mayor. El PAN a nivel nacional obtuvo el 15.45% de las votaciones y el 19.45% restante correspondió al resto de los partidos políticos registrados.²³

Hacia 1986, la ofensiva de la derecha se concentra en el intento de ganar una gubernatura en Chihuahua por parte del PAN. Ésta ha sido una de las jornadas electorales más tensas en la historia reciente de México. El 6 de julio de 1986 se dio dicho proceso político. El PAN alega el triunfo y, por ende, la gubernatura estatal. Los resultados finales, según la versión oficial, son a favor del PRI, con 59.99% de la votación; al PAN le corresponden el 34.49%; al PRT el 2.12%; al PSUM 0.68%; al PPS 0.38%; al PST 0.30%; y al PARM 0.26%. Votos anulados corresponden al 1.69%.²⁴ La abstención es uno de los datos más relevantes de este proceso electoral. Superó en este caso, el 48% del registro de ciudadanos (la votación total fue de 51.86%).²⁵

El ascenso de la oposición, hasta llegar a tener la capacidad de poder disputar gubernaturas al partido oficial, es muy significativo para el futuro del sistema político mexicano. Uno de los argumentos, —el oficial— encuentra su explicación en el descontento de la población ante la crisis. Sin embargo, confluyen una serie de factores que sin-

²¹ Ver Cornelius, Wayne, "Political liberalization and the 1985 elections in Mexico", en Drake, Paul y Eduardo Silva *Elections and Democratization in Latin America, 1980-1985*, U. of California, San Diego, 1986, p. 115.

²² El sistema parlamentario en México se compone por dos Cámaras: la de Diputados y la de Senadores. La primera tiene 500 integrantes, de los cuales 300 se eligen por quien obtenga la mayoría en cada uno de los 300 distritos electorales del país, y 200 por los porcentajes globales de la votación que obtenga cada partido. Los diputados se eligen cada 3 años. Los senadores se eligen uno por cada una de las 32 entidades federativas del país, en fórmula doble. Es escogido quien obtenga la mayoría de la votación y no hay senadores en base al porcentaje. Se escogen cada 6 años en elecciones paralelas a las presidenciales. El cambio de 400 a 500 diputados se da con la reforma política de 1986.

²³ Peschard, Jaqueline, y David Torres "Partidos, participación y conflicto", en *Política y partidos . . . op. cit.*, p. 19.

²⁴ Chihuahua, *Proceso electoral 1986*, 3a. edición, Dirección de Gobernación, gobierno del estado de Chihuahua, sep. de 1986, Cuadro 8.

²⁵ *Idem*, Cuadro 2.

tetizan la pérdida de legitimidad y credibilidad del sistema. También, son la expresión de la emergencia de una nueva sociedad civil con gran autonomía de la rectoría estatal de la economía y la política. Esto lo analizaremos más adelante.

5. El movimiento estudiantil de 1986-1987

A raíz de la implantación de reformas en el estatuto de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como cambios en la estructura de exámenes de evaluación; propuestas presentadas por el rector, Jorge Carpizo, y aprobadas por el Consejo Universitario, máxima autoridad de UNAM, se origina un movimiento estudiantil contra dichas medidas.

Las reformas implementadas por las autoridades pretenden limitar el ingreso de estudiantes para que la UNAM tenga una población estable, que no supere los 350 mil estudiantes. El movimiento estudiantil de 1986-1987 es radicalmente diferente al de 1968, principalmente en las demandas y objetivos, y en la forma de organización. La discusión entre estudiantes y autoridades no rebasó el ámbito universitario, por lo menos en el origen del movimiento —segundo semestre de 1986—, y en el desarrollo de la huelga estudiantil durante el mes de febrero de 1987. Ésta es la principal diferencia con el movimiento de 1968. 19 años antes el objeto directo del movimiento estudiantil era el Estado, con base en una crítica radical al sistema, que traslada el conflicto al ámbito nacional, a diferencia del actual conflicto, restringido a la UNAM.

Al comparar el movimiento de 1968 con el de 1986-1987, un importante analista político, señaló:

Así, el movimiento de 1987 se mantuvo dentro de los marcos de una discusión interna entre estudiantes y autoridades de la UNAM; fue un conflicto universitario, no un conflicto nacional. Los territorios de la pugna fueron los intramuros burocráticos y la vocación de reformas de la cúpula del campus, no la plaza pública, el monolitismo o la inmovilidad del sistema. (. . .)

A diferencia de entonces, ahora, luego de cuatro manifestaciones que hicieron desfilar por las calles hasta un millón de jóvenes no iracundos, no hubo un enfrentamiento, un muerto, un herido o siquiera un detenido por la fuerza pública.²⁶

La organización estudiantil denominada Consejo Estudiantil Universitario, CEU, se conforma

²⁶ Aguilar Camín, Héctor, "El efecto CEU", *Nexos*, abril de 1987, México, p. 27.

en 1986. Agrupa en su seno a los estudiantes de los distintos niveles de la estructura educativa de la UNAM, principalmente de enseñanza media (Preparatorias y Colegios de Ciencias y Humanidades) y superior (licenciatura). Sus demandas son corporativas (responden a los intereses del estudiantado como tal) y están despolitizadas.

El que estén despolitizadas las demandas estudiantiles no quiere decir que el movimiento no tenga efectos políticos. La importancia del mismo radica en que por primera vez desde 1968 este sector, duramente reprimido en aquellos años, se organiza de manera notable. El efecto político de esta nueva organización estudiantil en México se opone a las autoridades universitarias y, por ende, al Estado, pues la reforma educativa que se pretende impulsar en la UNAM está articulada a los planes estatales sobre educación superior. Por ello, aunque el conflicto se desarrolla sólo en el campus, repercute significativamente en el conjunto de la sociedad y el sistema político en México.

Los argumentos esgrimidos por el estudiantado, otro elemento a tomar en cuenta, se basan en rechazar los planes de austeridad económica del gobierno, pues estos recaen en el estudiante. En este aspecto, se critica fuertemente a la política económica estatal, ya que el intento de reducir la matrícula, implicaría no darle a la juventud la oportunidad de poder insertarse al sistema educativo. También, debido a la crisis, estaría imposibilitada de incorporarse al mercado laboral. Sobre este punto, hay que tener presente la inexistencia de empleo para la juventud. Si la matrícula universitaria se redujese en México, podrían darse fenómenos de violencia juvenil, que probablemente estarían fuera del control del sistema.

Además, la discusión lleva a replantear el esquema de "Universidad de masas" existente en México. La UNAM es una de las universidades más grandes del mundo. Su tamaño se debe a la inexistencia de topes reales al ingreso. En este país la universidad cumple el papel de válvula de escape de la juventud en lo concerniente a opciones a futuro. En años recientes el papel de la universidad como forma de acceder a estratos superiores en la estructura económica (movilidad social) se ha reducido por múltiples factores: la deficiente preparación profesional de los egresados, la diferencia entre los que ingresan al ciclo superior de enseñanza y los que concluyen sus estudios (los egresados en licenciatura nunca han superado el 10% de los estudiantes de primer ingreso), y la profundidad de la crisis económica que vive el país. Otro aspecto que influyó notablemente en el despertar del movimiento estudiantil es la estructura de gobierno de UNAM, pues ella no tiene incorporados en sus estatutos formas demo-

cráticas de elección de autoridades académicas. Por esto surge una gran contradicción entre lo que se entiende por universidad de masas y sus formas de gobierno. Este factor fue decisivo cuando el rector implanta las reformas en septiembre de 1986. El rechazo estudiantil se da tanto en su contenido como en las formas en que se pusieron en práctica.

De parte de las autoridades universitarias, se rechaza el que estén articuladas a un plan educativo nacional y respondan a las necesidades de reducción de presupuesto por el Estado, argumentando que la universidad de masas es incompatible con el nivel académico necesario que requiere el país en la formación de profesionistas. Por su parte, los estudiantes demandan mayor presupuesto para las universidades públicas, bajo la idea de que es posible compaginar a las universidades de masas con los requerimientos de profesionistas. En este sentido la discusión se centra entre el estudiantado y el rector en el proyecto de Universidad. Ambas partes sostienen que el contrario no tiene un proyecto definido de universidad. La rectoría afirma que el proyecto estudiantil no percibe en realidad las transformaciones profundas que debe tener la UNAM para atender las necesidades nacionales. El estudiantado sostiene que la rectoría no tiene proyecto propio y que responde sólo al Estado, tanto en sus necesidades de reducir el apoyo financiero a las universidades públicas, como en el proyecto de modernización de la estructura económica del país, que crecientemente está ligado a intereses de élites económicas y políticas más restringidas.

Para concluir, es preciso mencionar que el movimiento estudiantil representa un fenómeno de importantes repercusiones en la juventud mexicana, por su capacidad de organización ante una acción gubernamental que le afecta directamente. La relación del movimiento estudiantil con las expresiones más amplias de la juventud mexicana en los últimos años, la manifiesta uno de los dirigentes del CEU, Imanol Ordorika:

Existe un elemento común: el carácter juvenil del movimiento. La juventud de un país en crisis, sin opciones culturales y de empleo, una juventud decepcionada que buscaba vías de expresión violentas, marginales, y que de pronto encuentra una posibilidad de actuar. Es significativa la experiencia previa del temblor. En el actual movimiento operan brigadas de solidaridad que salieron a la calle aquellos días, son una herencia de ese momento en que los jóvenes descubrieron la posibilidad de asumir responsabilidades serias. Por eso resulta insuficiente explicar las movilizaciones en base a las acciones de un rector. La

situación general es estimulante, se abren posibilidades para destruir una visión fatalista de la de la realidad e incorporar la conciencia individual de un gran número de jóvenes para una modificación profunda.²⁷

Una de las repercusiones más significativas del movimiento estudiantil es que su desenlace no fue el mismo del de 1968. El pragmatismo mostrado en los diálogos entre estudiantes y autoridades hizo posible que por ambas partes se buscara la negociación. Sin embargo, aflora la gran inconformidad existente en el país, producto de la crisis económica y de la acción política del sistema, que cada vez es más excluyente.

6. La Corriente Democrática del PRI

La aparición de la "Corriente Democrática" (CD) en el seno del PRI es, sin duda, uno de los conflictos políticos más significativos del país en los últimos años. Esta división del partido oficial no es igual a las tradicionales escisiones que vivió el partido desde su fundación en 1929 hasta la década de los años cincuenta. Ellas tuvieron su origen en liderazgos caudillistas-militares —como la última de 1952, que pretendía alcanzar la nominación para presidentes del general Enrique Guzmán—. El único antecedente similar fue la separación del PRI de Vicente Lombardo Toledano, para fundar el llamado Partido Popular en la década de 1950.

La CD surge entre 1985 y 1986. La primera información pública aparece el 14 de agosto de 1986, y señala que un grupo de dirigentes del PRI, encabezados por Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, han conformado una tendencia democrática al margen de las autoridades del partido.²⁸

Hacia el 1° de octubre de 1986 se divulga el "Documento de Trabajo Número Uno",²⁹ considerado el ideario político de la corriente, y el 6 de mayo de 1987 se conoce el "Documento de Trabajo Número Dos", que habla fundamentalmente de las normas internas del PRI y la necesidad de poner en práctica los reglamentos internos de elección de dirigentes para responder a los retos políticos que la situación del país demanda.³⁰

La CD es la expresión pública de los límites

políticos que se sujetan a las tendencias observadas en los últimos años en el Estado y el mismo PRI. Se objeta principalmente la conducción de la política económica de la administración de Miguel de la Madrid. Se critica el surgimiento de una nueva clase política "tecnocrática", que no respeta la ideología y los propósitos de la revolución mexicana y que busca desplazar a las generaciones de políticos que dirigieron al país en los últimos años. Para la CD el Estado tiende a ligarse a los grupos representantes del gran capital monopolístico nacional e internacional. De esta manera se pone en juego la soberanía de la nación y la estabilidad del sistema político. También comparte la opinión de que la sociedad mexicana se orienta prácticamente hacia la derecha, y que esa misma tendencia se da en la conducción del Estado y en el PRI, y señala la existencia de un PRI donde prevalece la ideología conservadora para disputar la simpatía que el PAN ha logrado en sectores de la sociedad civil. Para sus dirigentes es una necesidad impostergable luchar contra la derechización del país.

El indicador principal que demuestra la tecnocratización del Estado y su alineamiento a fuerzas internacionales y a posiciones conservadoras, es la política económica antipopular, diseñada por el Fondo Monetario Internacional y el retroceso en la posición de avanzada de la política exterior del país. La voluntad en el pago de la deuda externa, el desmantelamiento de la participación del Estado en la economía, la brusca caída de la capacidad adquisitiva de los trabajadores, la modernización del país a costa de aceptar las condiciones del capital extranjero y la pasividad frente a la crisis centroamericana, son algunos de los hechos que impugnan los miembros de la CD.

El conflicto provocado por la aparición de la inconformidad en el PRI ha sido muy importante. Las tradicionales bases de soporte político del partido, golpeadas por la misma conducción de la política económica y la crisis, son los sectores a los cuales dirige su mensaje la CD en un inicio. Posteriormente busca apoyo de otros sectores sociales y políticos fuera del partido de cara a la contienda electoral presidencial de 1988.

La lucha de la CD durante 1987 pretende transformar las formas reales de nominación del candidato del PRI a la presidencia. Se impugna el sistema cerrado y antidemocrático del "tapadismo" y se postula una precampaña abierta, donde los distintos aspirantes hagan pública su ideología y su programa de gobierno. Ello decantaría en una convención nacional donde, con base en una elección con la participación de todas las secciones del partido, se elija al candidato. Lo anterior puso en tensión a la CD con numerosos sectores del partido. Uno de los que han reprobado su

²⁷ Ordorika, Imanol, en "Las voces del CEU", *Nexos*, febrero de 1987, México, p. 46.

²⁸ *Unomásuno*, México, 14 de agosto de 1986.

²⁹ "Documento de Trabajo Número Uno", primero de octubre de 1986, en Laso de la Vega, Jorge, *La corriente democrática: hablan los protagonistas*, México, Ed. Posada, 1987, págs. 257-260.

³⁰ "Documento de Trabajo Número Dos", 6 de mayo de 1987, *Idem*, págs. 315-320.

existencia es el sector obrero, encabezado por Fidel Velázquez, quien ha criticado duramente a sus integrantes.

La respuesta a las críticas de la CD sobre la conducción económica del gobierno, responde mencionando que la crisis no es por la política económica aplicada desde 1982, sino que ésta llegó a un punto climax, signado por la inviabilidad histórica del anterior modelo de desarrollo. O sea, se afirma que sus raíces son estructurales. A ello se añaden situaciones económicas muy desfavorables para el país como la caída de los precios del petróleo. Al respecto, los argumentos más sólidos contra la crítica de la CD a la política económica son los sostenidos por René Villareal:

La política de redimensionamiento, racionalización y reconversión del sector paraestatal constituye la sistematización más acabada sobre el papel de la empresa pública y la participación del Estado en la economía que se haya puesto en marcha en el país. (. . .)

La discusión no está en el plano de los principios, donde a mi juicio hay coincidencia (soberanía nacional, sociedad igualitaria y democracia integral), sino en el análisis de las situaciones, de las estrategias y de las tácticas, así como de los tiempos para aplicar la política económica.³¹

En junio de 1987 se agudiza la tensión entre la CD y la dirigencia del PRI. El 23 de junio se anuncia públicamente que la Comisión Nacional de Coordinación Política del PRI acuerda repudiar las acciones políticas de Cárdenas y Muñoz Ledo y busca sancionar su campaña de proselitismo político, prohibiendo el uso de las instalaciones del PRI. Se menciona también que los integrantes de la CD hablan a título personal.³² Esta primera sanción se completa con la expulsión del PRI de Cárdenas, al ser nominado candidato a la presidencia a mediados de octubre de ese año por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

Sin duda la aparición de la CD en el seno del PRI es un hecho relevante en la vida política de México. El conflicto se plantea en muchos niveles: políticos, históricos e ideológicos. Puede llevar a una escisión entre importantes sectores del PRI y su dirigencia. Esto irremediamente resquebrajaría la actual forma de conducción del sistema político y puede conducir a la creación de una nueva fuerza política en el país.

³¹ Villareal, René, "Confusiones de la Corriente", *Excelsior*, 23 de junio de 1987.

³² "Declaración de la Comisión Nacional de Coordinación Política del Partido Revolucionario Institucional", *Excelsior*, 23 de junio de 1987, p. 18-A.

La CD aparece en México en un momento de gran tensión política. La emergencia de la derecha es notable en el norte y centro del país y las manifestaciones de la crisis también se expresan en un creciente descontento de amplios sectores de la sociedad. Ello es evidente, por ejemplo, en la juventud. El momento político también es crucial dada la cercanía de la sucesión presidencial.³³ Desde la nominación de Cárdenas a la presidencia por el PARM, se produce la separación formal de los integrantes de la CD del PRI. La dinámica política que se abre con este hecho conduce a la confluencia de sus integrantes con los partidos políticos y numerosas organizaciones populares ubicadas a la izquierda del PRI. Esta convergencia se da con el objeto de presentar una candidatura unitaria a la presidencia, cuyo pilar es la figura de Cuauhtémoc Cárdenas.

7. Las elecciones presidenciales y federales de 1988

A partir del segundo semestre de 1987 la vida política del país se vuelca a la contienda electoral para presidente, diputados federales, senadores y en el caso del Distrito Federal para elegir miembros de la Asamblea de Representantes. En Chiapas el mismo día se eligió al gobernador.

Entre julio y noviembre de 1987 el conjunto de los partidos políticos definen quienes van a encabezar la campaña presidencial. El PAN selecciona al ingeniero Manuel J. Clouthier. Se disuelven los partidos Mexicanos de los Trabajadores (PMT) y el Socialista Unificado de México (PSUM) para fundar el Partido Mexicano Socialista (PMS), donde el ingeniero Heberto Castillo es postulado a la presidencia. A finales de octubre, después de uno de los más tortuosos y complejos momentos de la vida del partido, el PRI elige a Carlos Salinas de Gortari como candidato. En el seno de la CD del PRI se perfila la figura de Cuauhtémoc Cárdenas como aspirante a la presidencia. Se crea el Frente Democrático Nacional (FND), encabezado por cuatro fuerzas políticas para fortalecer la candidatura de Cárdenas: la CD, el PARM, el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional (PFCRN), que incorpora a los más importantes dirigentes del disuelto Partido Socialista de los Trabajadores (PST). A esta compleja constelación de fuerzas políticas que luchan por la presidencia y por espacios parlamentarios se agregan los minoritarios Partido Demócrata Mexicano (PDM), postulando a Gumersindo Magaña,

³³ Carreño Carlón, José, "La sucesión Presidencial", *Nexos*, México, núm. 115, julio de 1987.

y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), propone como su candidato a la señora Rosario Ibarra de Piedra (esta es la única nominación para presidente que repite, pues Rosario Ibarra también participó en las elecciones de 1982).

De los seis aspirantes a la presidencia, en el transcurso de la campaña sobresalen cuatro de ellos: Salinas, Cárdenas, Clouthier y Castillo. Sin embargo, por la creciente simpatía y apoyo popular que se canalizó en favor de Cárdenas, un mes antes de las elecciones, el 6 de junio de 1988, el PMS y Castillo declinan su candidatura en favor de Cárdenas. Este proceso de unión sólo comprendió la nominación a la presidencia. No obstante, se enarbola una plataforma común de principios orientada a consolidar el proceso de fusión política de las fuerzas nacionalistas, progresistas y socialistas agrupadas en el FDN y el PMS. El texto del convenio señala en su introducción que:

La Corriente Democrática y el Partido Mexicano Socialista, conscientes de la gravedad de la crisis económica y política a que ha conducido al país el grupo en el poder, de la necesidad de eliminar los obstáculos al desarrollo democrático de la sociedad mexicana, de recuperar la dignidad nacional y la plena soberanía, así como de detener la ofensiva contra el nivel de vida de la mayoría de la población y el deterioro de la planta productiva; atentos a la aspiración creciente de nuestro pueblo de sustituir el actual grupo gobernante e instaurar un nuevo régimen gubernamental como producto de la voluntad mayoritaria expresada en las urnas; guiados por las mejores tradiciones patrióticas y democráticas de la nación y respetando la autonomía y los derechos de cada una de las dos organizaciones, hemos llegado al acuerdo de unir nuestra acción con base en los siguientes puntos de programa y compromisos políticos.³⁴

Sin duda el mes de junio de 1988 puede considerarse el lapso más importante de la vida política reciente del país y las elecciones del 6 de julio las más significativas desde que concluyó la etapa armada de la revolución mexicana. En el último mes de campaña electoral se consolida la figura de Cárdenas y así la contienda se focaliza en una lucha que tiene tres vértices: el FDN-PMS, el PRI y el PAN. El crecimiento del respaldo popular a las candidaturas de Cárdenas y Clouthier se debe a que ambos, con un lenguaje diferente y hasta antagónico, logran canalizar a su favor, el descon-

tento del conjunto de la sociedad civil hacia el sistema. El respaldo que obtienen es el indicador más fidedigno de la nueva y conflictiva realidad política del país.

El hecho novedoso de la actual situación política es que hasta principios de 1987 se observaba una correlación de fuerzas favorable a las tendencias ideológicas ubicadas del centro político hacia la derecha. Incluso el ascenso del PAN como segunda fuerza del país, por su gran presencia y respaldo logrado principalmente en el norte desde 1982, y afianzada en las elecciones federales de 1985 y para gobernadores, principalmente en Chihuahua en 1986, perfilaba a México hacia un sistema bipartidista. Con la fusión de lo que hasta 1987 eran partidos satélites del PRI (PARM, PPS y PST), la CD y el actual PMS, se abre una balanza de tres poderes donde el polo nacionalista y progresista logró ser la segunda fuerza política del país. Éste fue un hecho notable en el resultado electoral del 6 de julio de 1988.

Después de un lento y polémico proceso de contabilidad de la votación, donde la oposición del PAN y del FDN sostiene que el triunfo del PRI se logra recurriendo al mecanismo del fraude, el PRI obtiene para su candidato 50.36% de la votación (9,641,32); Cárdenas logra el 31.12% (5,956,988) y Clouthier el 17.07% (3,267,159). De los votos totales para presidente, (19,099,157), el resto son para Ibarra y Magaña, que obtienen el 0.42% y el 1.04% respectivamente. El padrón electoral tenía registrados a 38,074,926 ciudadanos, siendo la abstención de casi 50% (18,974,769, 48.42%). En las elecciones para diputados, los resultados oficiales son: PAN, 3,248,016 (18.08%); PRI 9,165,222 (51.02%); PPS 1,659,462 (9.23%); PMS 802,525 (4.46%); PFCRN 1,681,710 (9.36%); PARM 1,092,168 (6.08%); PDM 223,216 (1.2%); y PRT 88,455 (0.5%). En las elecciones para diputados, las cifras oficiales presentan una abstención superior al 50% (20,114,152). El resultado final de diputados federales se emite el 30 de agosto, correspondiendo 260 para el PRI, y 240 para la oposición (139 para el FDN y 101 para el PAN).³⁵

La oposición alega que el fraude se basó en la gran abstención y manipulación del padrón, y en el voto rural, debido a la dificultad de poder ser vigilado por representantes de los partidos opositores y por la coacción ejercida en poblaciones más alejadas y marginadas del país. Incluso la distribución geográfica del voto (geopolítica electoral) demuestra que para el PRI votó el

³⁴ "Convenio Político que suscriben la Corriente Democrática y el Partido Mexicano Socialista", 6 de junio de 1988, *La Jornada*, México, 9 de junio de 1988, p. 26.

³⁵ Las cifras oficiales se emiten, para presidente, el 16 de julio de 1988, ver *Excelsior* y *La Jornada*, 14 de julio de 1988, y para diputados federales, el 22 de agosto de 1988, ver *Excelsior* y *La Jornada*, 23 y 31 de agosto de 1988.

México atrasado y rural y que en favor de la oposición los sectores urbanos y modernos: para el PAN en el norte y para el FDN-PMS en la ciudad de México y Michoacán. Esto significa un reto adicional al PRI, por la pérdida real de legitimidad, la disminución de la hegemonía política y el cambio necesario en las formas de ejercicio del poder tradicionales en el sistema político.

A nivel parlamentario, la tendencia que se desprende desde la reforma política de 1977 y que se expresa en términos reales desde las elecciones de 1982, con la presencia activa de representantes de la oposición, se consolida en el actual proceso electoral. Desde la próxima legislatura que iniciará su periodo de sesiones el primero de septiembre de 1988, las Cámaras de Diputados y de Senadores cumplen ahora una función legislativa real, mermando y transformando el tradicional "presidencialismo". Las cifras oficiales le otorgan a la oposición 241 asientos, de los 400, en la Cámara de Diputados: PAN 101; PPS 45; PFCRN 42; PARM 33; PMS 20. Se reconocen asimismo, dos senadurías para el FDN, la del Distrito Federal y la de Michoacán (estas cifras son aproximadas, pues las cifras oficiales definitivas están en discusión).

8. Consideraciones finales. El futuro de la democracia mexicana

La situación política que vive México en la actualidad es mucho más compleja y conflictiva que hace una década. Un dato es revelador de ello: en las elecciones presidenciales de 1976, cuando el PRI postula a José López Portillo como candidato a la presidencia, no hubo contendientes. La derecha se encontraba totalmente disgregada y a la defensiva, no postula un candidato propio para la lucha electoral. En la izquierda sucedió lo mismo. Diez años más tarde la derecha es una fuerza política muy importante. En algunos estados ha logrado competir con gran fuerza al PRI. La izquierda, por su parte, vive un proceso político de unidad nunca antes visto en su historia.³⁶ Esta maduración de la izquierda se inicia en el complejo proceso de convergencia del PSUM y PMT, para crear el PMS, por un lado, y en la creación del FDN por el otro. Su máximo logro es la postulación unitaria de Cárdenas a la presidencia.

En los años ochenta prácticamente todas las fuerzas de oposición política del país eligen la lucha electoral-parlamentaria como el eje de sus actividades. El parlamento se ha revalorado como

un poder legislativo donde confluyen, debaten y se enfrentan las fuerzas del país y su proyecto de nación. Principalmente la Cámara de Diputados, las legislaturas locales y ahora el Senado se convierten en arena de confrontación política. No obstante, otros ámbitos de acción han sido definidos por la oposición política: la lucha cívica, —que llegó a tener expresiones de "desobediencia civil" y violencia en 1985 y 1986— se ha manifestado como forma de protesta en el norte del país, cuando la ciudadanía consideró que se violó la votación, favoreciendo al PRI.

A nivel popular en los años ochenta se dan manifestaciones significativas de rebeldía al sistema. Ejemplo de ello son el conjunto de organizaciones que agrupan el llamado "Movimiento Urbano Popular". Éste, después de un reflujo y atomización observado en 1984-1985, revivió con gran fuerza a raíz de los sismos de septiembre. También movimientos provenientes de las zonas rurales e indígenas más pauperizadas han cobrado fuerza. Ello se expresa a través de numerosas marchas, plantones, huelgas de hambre (muchas de las cuales se realizan en el "Zócalo" de la ciudad o en las afueras de la casa presidencial), que son consecuencia del agotamiento, incluso "generacional" de la reforma agraria, y por las medidas de modernización de la agricultura. En los años recientes la legislación agraria ha perjudicado al ejido y a los pequeños productores agrícolas y ha beneficiado al latifundio y a la modernización del campo, extendiéndose la proletarianización del campesinado.

Los efectos de la política económica también se han expresado en un creciente descontento en las clases trabajadoras. La caída del salario obrero es quizá el resultado más negativo de la política económica gubernamental. Se presentan numerosas manifestaciones de autonomía sindical, a través de huelgas en los sindicatos más poderosos del país, como telefonistas, electricistas, magisteriales, que pueden conducir al enfrentamiento político con el sistema y el desgaste del "pacto corporativo". Una de las formas de acelerar el desmantelamiento de la participación del Estado en la economía y propiciar la reconversión industrial es volcar la huelga contra la misma clase obrera. Por ejemplo, en empresas como URAMEX, DINA, y Aeroméxico, propiedad del Estado, la huelga y su negociación es utilizada para hacer desaparecer la propia empresa. De igual manera es un recurso utilizado en la empresa privada, principalmente en la de capital transnacional, para acelerar la productividad y reducir el personal, esto se da fundamentalmente en la industria automotriz. Lo anterior conduce a una transformación profunda de la composición de la clase obrera, incluso reduciéndose en números abso-

³⁶ Ver el debate "México: la democracia y la izquierda", *Cuadernos Políticos*, núm. 49-50, México, enero-junio de 1987.

lutos —como ya ha sucedido en países de América Latina como Chile, Argentina o Bolivia—. El potencial de conflicto político de este fenómeno aún no es considerado con la debida importancia en nuestro país.

Otra tendencia observada en México es el crecimiento del sector informal de la economía, evidente en varias actividades: 1) crece la producción y comercialización de narcóticos;³⁷ 2) el subempleo se ha incrementado a niveles alarmantes en las ciudades y el campo;³⁸ 3) la producción industrial fuera del control gubernamental y sindical —como la maquila doméstica— observa un gran crecimiento. Lo anterior pone al descubierto nuevas tendencias en el modelo de desarrollo del país, dirigidas hacia la consolidación de una sociedad DUAL compuesta por un polo totalmente moderno, con el resto de la economía y un sector importante de la población incorporado al sector informal, marginal e incluso ilegal. Las consecuencias políticas de esto probablemente influyeron en la pérdida de la legitimidad del sistema político, dada la ausencia de canales de mediación y control hacia dichos sectores de la población, y porque estos tienden a organizarse de manera autónoma. Uno de los retos políticos que deberá enfrentar el sistema en los años inmediatos es el de la juventud. Siendo la niñez y la juventud el futuro del país, no existen políticas de empleo y educación que afronten las necesidades crecientes de capas generacionales nuevas. El movimiento estudiantil de 1986-1987 fue la primera expresión de lo anterior. La ausencia de alternativas y estímulos para la juventud se da en todos los niveles: económicos, políticos e incluso culturales.

El fortalecimiento de la oposición política y el ascenso de la sociedad civil como actor sociopolítico de primer orden en México, presenta varias tendencias. Hay un creciente descontento de las clases medias, principalmente por la crisis y sus efectos en lo económico y por la estrechez del sistema en atender las demandas de democratiza-

ción en lo político. Este es uno de los principales argumentos de la Corriente Democrática del PRI³⁹ y de los partidos de oposición. Este descontento también incluye a importantes sectores populares. En un principio (1983-1987) el principal beneficiado fue el PAN, quien levantó como pilar de su campaña de su proselitismo político el respeto al voto. Posteriormente la izquierda también fue favorecida (1986-1988). La diferencia entre el apoyo al PAN y a la izquierda es que el primero se sustenta con base en demandas que tienen un origen "individualista" (el respeto al voto), pasando a ser cada vez más un planteamiento generalizado de la sociedad civil. En cambio, la izquierda y los sectores nacionalistas y progresistas hacen suyas las demandas más cercanas a las necesidades económicas de los sectores más desprotegidos: salarios justos, política agraria que favorezca a ejidatarios y pequeños propietarios, política de reforma integral (por ejemplo, hacer propietarios a los inquilinos y regularizar las propiedades de los asentamientos irregulares), etcétera.

Por lo anterior en México se ha abierto una polémica acerca de la naturaleza del momento político que vive el país. La discusión surge en la consideración generalizada que afirma que el sistema político está en crisis y en la apreciación de que ella se encuentra en una tendencia ascendente. Esta versión es postulada por el conjunto de la oposición y por numerosos analistas internacionales.⁴⁰ Otra posición sostiene que se da una pérdida de hegemonía y consenso, pero que esto no es irreversible y que, en las condiciones de crisis económica, si no fuera por la solidez de las instituciones políticas, el sistema habría sucumbido ante una crisis integral (económica y política). Por lo tanto, la segunda opinión afirma que no existe crisis política, sino simplemente pérdida de consenso y desgaste del sistema, y que esto puede ser superado en el futuro. El PRI y el Estado comparten esta última afirmación.

Lo que no cabe duda es que el sistema político se encuentra a nivel electoral en el umbral del tripartidismo. El complejo sistema electoral mexicano, que comprende cuatro tipos diferentes de procesos: el municipal, el federal (diputados y senadores), el estatal (provincial) y el presidencial,

³⁹ Entrevista de Jorge Laso a Porfirio Muñoz Ledo, en Laso *op. cit.*, págs. 15-40.

⁴⁰ Es muy relevante la información proporcionada al respecto por la prensa internacional en el momento de las elecciones. El *New York Times*, por ejemplo, señaló que "La elección registró gran insatisfacción con el sistema de partido único y con seis años de austeridad está devastada la popularidad del régimen. (...) El PRI se basa en la arrogancia, corrupción y fraude electoral. (...) Gane o pierda, el PRI necesita seguir a su líder, Carlos Salinas, cuando reconoció la nueva realidad política de la nación", *The New York Times* July 9, 1988, p. 14.

³⁷ El problema del narcotráfico adquiere creciente importancia en México en términos económicos y políticos. Las fuerzas armadas dedican el 25% del total de sus efectivos a erradicar plantíos de drogas y la Procuraduría General de la República destinó en 1985 41.13%; y en 1986 42.6% de su presupuesto para el combate al narcotráfico. Puede tener repercusiones políticas en un futuro cercano en el interior del país, como ya sucede en Colombia y Bolivia. También se ha convertido el narcotráfico en uno de los puntos más sensibles de la relación México-Estados Unidos. Ver Secretaría de la Defensa Nacional-Procuraduría General de la República, *Campaña permanente contra el narcotráfico*, México 1986; y Bermudez, Lilia y Raúl Benítez Manaut "Seguridad Nacional y crisis en las relaciones México-Estados Unidos-Centroamérica (1979-1987)", ponencia al Primer Congreso Universitario México y América Latina ante los Estados Unidos", UNAM, 15 al 22 de junio de 1987.

³⁸ Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, A.C. *La Economía Subterránea en México*, 2a. Edición Diana, 1987.

está transformándose rápidamente en los dos primeros niveles. En ellos la oposición ha logrado grandes avances. Sin embargo, es muy difícil que se ceda en los niveles superiores (estatal y presidencial), pues sí implicaría una evolución y maduración de la vida política. La oposición tiene ante sí una gran ventaja: el nivel de descrédito, manifestado de forma creciente a través del voto a su favor y por la abstención electoral.

El conjunto de conflictos políticos que ha vivido el país en los últimos años, cuyo climax se vivió en la jornada electoral del 6 de julio de 1988, orillan a reflexionar sobre el futuro del sistema político mexicano y sobre la vigencia de la democracia.

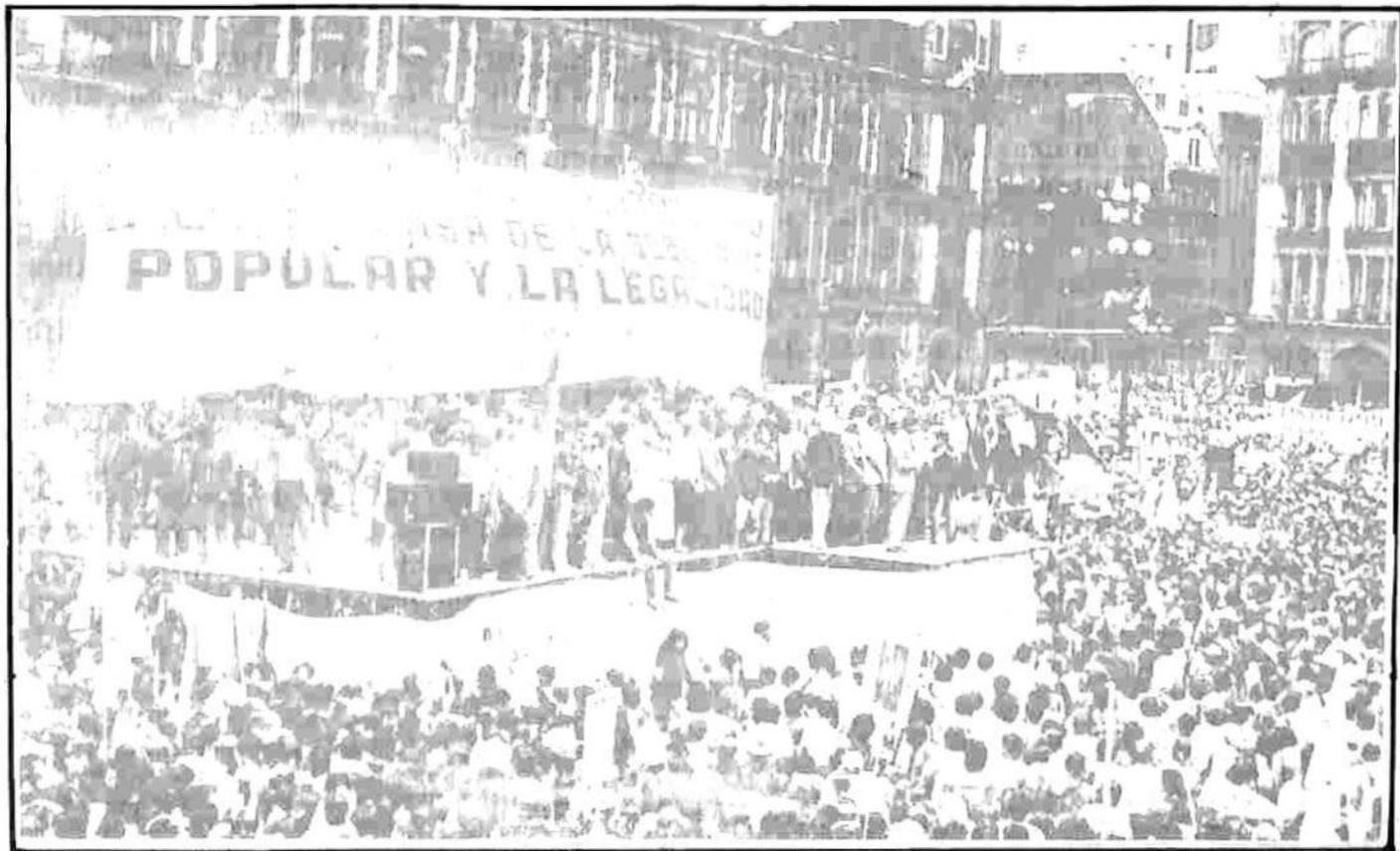
Sin duda, el sistema fue duramente castigado por la sociedad civil. El PRI de alguna manera fue condenado y advertido. Es obvio que la victoria del PRI, ganada con o sin fraude, puede convertirse en una gran derrota en un futuro cercano. El primer espacio —antes vetado— al cual tuvo acceso la oposición fue la Cámara de Senadores. Probablemente algunos estados de la República como Michoacán o Chihuahua sean gobernados por candidatos del FDN y del PAN en el corto plazo. Ante

esto, es difícil saber si el PRI reconocerá la nueva realidad política, se adapte a ella a través de la modernización y erradicación de formas viciadas del quehacer político, o si sucumbe ante la emergencia de las nuevas fuerzas políticas. Sin duda el eje de la discusión está en la forma que adquiere a partir de 1988 la lucha por la democracia en el país.

Un valor en común que postulan todas las fuerzas políticas del país es el de la democracia. Sin embargo, cada cual la entiende a su manera:

La democracia se ha convertido en México en objeto de la inmensa mayoría que se ocupa de política. Precisamente por eso la polisemia de las palabras es una de las más ricas y contradictorias. (. . .) A dónde va este movimiento múltiple por la democracia? y dentro él, con con qué y contra qué proyecto de democracia están luchando las distintas fuerzas? de quién es la crítica al autoritarismo?⁴¹

El PRI tiene el reto de que su postulado ideológico en favor de la democracia no es avalado por



⁴¹ González Casanova, Pablo, "Pensar la democracia", en *Primer Informe sobre la democracia*, op. cit.

importantes sectores políticos y sociales del país. Además, existe un divorcio notable entre su planteamiento y la acción autoritaria de ejercicio del poder. En el discurso más importante de Salinas durante su campaña, se observa esta brecha entre el deber ser y la realidad.⁴² Para el PRI la dificultad se centra en que si se democratiza y moderniza para afrontar la nueva realidad nacional, puede significar una acción suicida. Pero también puede tambalearse ante la presión de la oposición y los sectores sociales descontentos del país. Para el PAN la democracia es un conjunto de valores donde lo individual se sacraliza; por ello, el respeto al voto y a la propiedad privada son los valores fundamentales de su filosofía. Las fuerzas políticas agrupadas en la coalición FDN-PMS definen a su vez a la democracia tanto en términos sociales como individuales. Incorporan a ella igualdad en la distribución del ingreso, soberanía nacional, así como el respeto al voto.

El conjunto de la oposición comparte la idea de que el actual sistema político es autoritario, pero que la vida política del país tiene creadas las instituciones para transitar a la verdadera democracia. El voto por esto se revalora y magnifica como herramienta principal de lucha política. Para el PRI y el Estado existe una democracia en funciones, sólo que ésta debe ser adecuada a las nuevas condiciones del país.

Las incógnitas que se desprenden a partir de 1988 en México son: primero, si será respetada la voluntad popular en futuros comicios; segundo, si esta lucha conducirá o no en el mediano plazo a una desintegración política del país (dado que los proyectos de nación llegan a ser antagónicos), porque alguna de las dos fuerzas de oposición —izquierda y derecha—, al ocupar los espacios del poder, pretendiera modificar a su favor la legislación electoral nacional (básicamente la Constitución), laboral, agraria, etcétera, pudiendo resquebrajarse el sistema político; tercero, si emergieran actores nuevos para intentar dirimir el conflicto político. Estos actores pueden ser nacionales —como las fuerzas armadas—⁴³ o internacionales. Estados Unidos sería el país que probablemente

intentaría involucrarse para su beneficio, con base en una percepción que sostenga que la inestabilidad de México debilita o amenaza su seguridad nacional.⁴⁴

Actualmente existen dos proyectos de nación en pugna, aunque las fuerzas que luchan por ellos —manera pura, o amalgamando propuestas dispersas— sean tres.

El primer proyecto, postulado abiertamente por la coalición FDN-PMS y sectores nacionalistas ubicados en el PRI, comparten el principio de regresar al proyecto original de la revolución mexicana y amoldarlo a las condiciones nacionales e internacionales de fin de siglo. Su referente histórico principal es la presidencia de Lázaro Cárdenas, su postulado político es luchar por la democracia social, la soberanía nacional y reencauzar la política exterior con base en sus principios y doctrinas. Se comparte en el conjunto de estas fuerzas, transformar la economía en beneficio de las mayorías y renegociar de manera radical las condiciones de pago de la deuda externa.

El otro proyecto de nación que manifiestamente promulga el PAN y sectores importantes del PRI, busca fortalecer la propiedad privada, desmantelar la participación del Estado en la economía, modernizar el conjunto de la estructura económica del país y realinear a México en el cambiante sistema internacional. El hecho de que en política existan notables divergencias entre el PRI y el PAN se debe a que este último exige respeto a la decisión popular, no cuestiona los postulados principales de la actual política económica, solamente está en desacuerdo con los mecanismos en que el Estado participa en la economía (por ejemplo, critica el burocratismo y la corrupción).

Igualmente, la posibilidad de recuperación de la hegemonía del PRI o su resquebrajamiento, dependen tanto de la capacidad que tenga de estabilizar y reencauzar la economía Salinas a partir de que asuma la presidencia, el primero de diciembre de 1988, como de condiciones internacionales que están fuera de su control. Las variables económicas e internacionales son muy difíciles de poder predecir, pero sin duda también tendrán un gran peso en el acontecer político del país.

⁴² Salinas de Gortari, Carlos, "El reto de la democracia" (Discurso pronunciado en la ciudad de Puebla), *La Jornada*, 5 de mayo de 1988, p. 22.

⁴³ Sin duda la actitud política de las fuerzas armadas, que hasta ahora se han mantenido pasivas, respetando la institucionalidad política, puede variar por múltiples factores. Este es uno de los aspectos más desconocidos de la realidad política del país. Ver Ronfeldt, David, (Editor) *The Modern Mexican Military: A Reassessment*, Center for U.S. Mexican Studies, University of California, San Diego, 1984; y Piñeyro, José Luis, *Ejército y Sociedad en México: Pasado y Presente*, México, UAM-UAP, 1985.

⁴⁴ Estados Unidos se ha mantenido muy cauteloso acerca de los acontecimientos en México. Sin embargo, en algunos sectores se habla del "Síndrome de Irán", o de la filipinización de México y cómo esto puede afectar su seguridad nacional. Este tipo de argumentos es utilizado con fines intervencionistas en sectores conservadores del Congreso y la administración Reagan. Ejemplo de ello son las audiencias promovidas por el senador Jesse Helms o las actitudes del embajador John Gavin. Ver "El impacto de las audiencias Helms en la relación bilateral", PERIM-CIDE *Carta de Política Exterior Mexicana*, México, Año VI, núm. 2, abril-junio de 1986.